

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y SOCIAL

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Cada vez es más evidente que el deterioro progresivo de nuestros ecosistemas, y las catástrofes naturales que el calentamiento global hace más virulentas y frecuentes, son realidades ante las que nos estamos viendo obligados a reaccionar, casi “in extremis”, cercanos ya a un punto de no retorno.

En la Región de Murcia, teniendo en cuenta las dramáticas consecuencias de la última “gota fría”, los largos periodos de sequía que venimos sufriendo, o el estado en el que se encuentra nuestro Mar Menor, estamos ya dando buena cuenta de cuál es el elevado precio a pagar por seguir haciendo caso omiso a la situación de emergencia climática en la que nos encontramos.

Como región mediterránea, la nuestra es una zona especialmente vulnerable a los efectos que el aumento de las temperaturas tiene, tanto sobre el peligro de desertificación, como sobre el agravamiento de fenómenos típicos y potencialmente peligrosos como las “DANA’S”. Es, además, ejemplo de mala planificación urbanística, edificación descontrolada y falta de recursos puestos al servicio de la prevención, del acondicionamiento y conservación de litorales, cauces, masas forestales o infraestructuras de alcantarillado. Influye, asimismo, la generalización de un modelo de producción y de consumo insostenible, basado en exprimir mano de obra barata, con tendencia a la desregulación laboral y medioambiental.

El impacto de ese modelo excede brutalmente la capacidad de recuperación de nuestro planeta y, con él, estamos poniendo en peligro la salud y la supervivencia de millones de personas en el mundo. Frente al beneficio cortoplacista que esto genera para unos pocos, el coste de sus consecuencias, actuales y futuras, sobre la naturaleza y la población, que nos vemos obligados a asumir colectivamente, es inconmensurable: en términos de pérdida de biodiversidad, mortandad prematura, asistencia sanitaria o daños materiales.

Tenemos que ser capaces de romper el mito de que la contaminación es un peaje obligatorio del progreso económico, y apostar por alternativas sostenibles que, por supuesto, las hay.

La reducción de las emisiones a la atmósfera y los vertidos contaminantes, el impulso de las energías renovables y la conservación medioambiental, deben ser ejes prioritarios de una transición ecológica que las Administraciones Públicas, en todos sus niveles, tienen que comprometerse a tutelar y respaldar financieramente, velando, además, por no dejar a nadie atrás.

Y es que la degradación medioambiental, la pobreza y la desigualdad son varias caras de un mismo problema de fondo. Las capas de población más humildes son las que más están sufriendo las consecuencias del modelo actual y de sus efectos sobre el cambio climático. No sería justo que también recibieran el impacto de un proceso de ecologización de la economía que no las tuviera en cuenta.

Por todo ello, defendemos que este proceso se acompañe con programas formativos y de empleabilidad específicos y se propicie la creación de “empleos verdes”, la reducción de las jornadas laborales y, en general, la extensión del trabajo decente. Al mismo tiempo, son necesarias medidas que democratizen el acceso a la energía, el transporte limpio y una protección social suficiente y digna. Y en el ámbito de la prevención, es imprescindible repensar el actual planeamiento urbanístico, y reforzar y dar estabilidad a los cuerpos de seguridad y emergencia, y a los recursos humanos y materiales al servicio de labores de conservación y acondicionamiento medioambiental.

Estamos a tiempo de actuar frente a esta emergencia climática y social, pero vamos a contrarreloj. Los compromisos políticos en este sentido han de ser inmediatos, firmes y garantizar una transición socialmente justa. Por ello, en UGT nos unimos a la movilización mundial por el clima, y animamos al conjunto de la ciudadanía a sumarse también, por un futuro sostenible.

Antonio Jiménez Sánchez es Secretario general de UGT de la Región de Murcia